



GD-F-008 V.9

Página 1 de 10

**RESOLUCIÓN No. SSPD - 20174010060215 DEL 19/04/2017**

**“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”**

**EL ASESOR QUE FUNGE COMO COORDINADOR DEL GRUPO DE CERTIFICACIONES E INFORMACIÓN**

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, en la Resolución No. SSPD 20171300023445 de 2017, la Ley 1437 de 2011 y,

**CONSIDERANDO:**

**1. ANTECEDENTES**

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual *“se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”*, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla según sea el caso, a los distritos y municipios del país.

Que el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, estableció que *“La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007”*.

Que el Superintendente de Servicios Públicos mediante Resolución No. SSPD 20171300023445 del 24 de marzo del 2017, delegó en el Asesor que funge como Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos a través de los cuales se certifique o descertifique a los municipios y distritos, en lo relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, aclarar dichos actos y resolver los recursos que contra ellos se presenten.

Que el Municipio de MACARAVITA del Departamento de SANTANDER, es de categoría 6 y al haber sido prestador directo de los servicios público de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2015, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 2.3.5.1.2.1.6. y 2.3.5.1.2.1.7 del Decreto 1077 de 2015.

Que mediante Resolución No. SSPD 20164010055045 del 30 de septiembre de 2016, la SSPD decidió DESCERTIFICAR al Municipio de MACARAVITA del Departamento de SANTANDER, por no haber cumplido los siguientes criterios previstos en el artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015:

- (i) Reporte en el SUI, de la creación del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos mediante acto administrativo municipal o distrital.
- (iii) Reporte en el SUI de la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital o quien haga sus veces, en la que conste que la estratificación aplicada en la vigencia a certificar está conforme a la metodología nacional establecida.

Al igual que por no haber cumplido el siguiente requisito previsto en el artículo 2.3.5.1.2.1.7 del Decreto 1077 de 2015.



C014/5927



C014/5927

- *(i) Reporte en el SUI del estudio de costos y tarifas en formato PDF, elaborado con posterioridad a la entrada en vigencia de las metodologías tarifarias para cada uno de los servicios públicos prestados*

La Resolución No. SSPD 20164010055045 del 30 de septiembre de 2016 se notificó personalmente al Alcalde del Municipio de MACARAVITA, el día 26 de octubre de 2016, tal y como se observa en el expediente.

Que el Municipio de MACARAVITA – SANTANDER, mediante los documentos radicados bajo los Nos. SSPD 20165290762722 y 20165290769102 del 8 y 10 de noviembre del 2016, interpuso oportunamente recurso de reposición contra la resolución de descertificación.

## **2. ARGUMENTOS DEL MUNICIPIO Y PRUEBAS APORTADAS CON EL RECURSO DE REPOSICIÓN**

### **2.1 Argumentos del recurrente**

Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del ente territorial:

2.1.1 Con respecto del requisito ***“(i) Reporte en el SUI, de la creación del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos mediante acto administrativo municipal o distrital.”*** el recurrente alegó que no se incumplió el requisito dado que se incurrió en un yerro en la numeración del Acuerdo Municipal, y que este constituye un error de forma sobre el documento y no de fondo en la aplicación del mismo.

Afirma que su articulado faltante correspondió a un error en la digitación y agrega que el acto administrativo está vigente y en aplicación hace más de 16 años. Adjunta con el recurso el Acuerdo Municipal No.05 de 1999, certificando que efectivamente se incurrió en el yerro numérico mencionado.

2.1.2. Con respecto del requisito ***“(iii) Reporte en el SUI de la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital o quien haga sus veces, en la que conste que la estratificación aplicada en la vigencia a certificar está conforme a la metodología nacional establecida.”*** el recurrente alegó no se incumplió el requisito dado que el certificado cargado al SUI cumple con los requisitos normativos y da constancia de que se aplicó la estratificación a la metodología nacional establecida.

Afirma que, independiente de los términos utilizados, lo relevante es que la certificación da certeza del uso de la metodología según lo establecido en el ordenamiento jurídico. Con el fin de corregir y dar claridad al requisito incumplido, adjunta una certificación expedida por el secretario técnico del Comité Permanente de Estratificación Municipal que ***“aclara los presuntos errores de forma señalados por el ente evaluador.”***

2.1.3. Con respecto del requisito ***“(i) Reporte en el SUI del estudio de costos y tarifas en formato PDF, elaborado con posterioridad a la entrada en vigencia de las metodologías tarifarias para cada uno de los servicios públicos prestados”*** el recurrente alegó que no se incumplió con este, dado que lo reportó oportunamente en la plataforma. Agrega que la supuesta imposibilidad de abrir el archivo en la aplicación INSPECTOR del SUI no es cierta. Argumenta que, en razón del tamaño del archivo, lo subió en formato “winrar.” y explica la forma de visualizarlo.

Como prueba del cumplimiento del requisito, adjunta el respectivo estudio de costos y tarifas correspondiente a la metodología tarifaria para cada uno de los servicios públicos prestados.

### **2.2 De los documentos aportados con el recurso de reposición.**

Con los documentos radicados con los No. No. SSPD 20165290762722 y No. SSPD 20165290769102, por medio de los cuales se sustentó el recurso de reposición, se allegaron los siguientes documentos para que sean tenidos en cuenta como prueba:

2.2.1. Certificaciones expedidas por el Comité Permanente de Estratificación de Macaravita, Socotá y Ciénega.

2.2.2. Oficio No. SSPD 20164010355961 del 21 de junio del 2016 dirigido al Alcalde de Socotá y oficio de fecha 12 de septiembre del 2016, dirigido al Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

2.2.3. Resolución No. SSPD 20164010057425 del 30 de septiembre del 2016.

2.2.4. Oficio No. SSPD 20164010520651 del 6 de septiembre del 2016 dirigido al Alcalde de Ciénega.

2.2.5. Resolución No. SSPD 20164010055475 del 30 de septiembre del 2016.

2.2.6 Copia del Acuerdo de creación del FSRI.

2.2.7 Actas Nos. 004, 005 y 006 de mayo de 1999, del Concejo Municipal de Macaravita.

2.2.8. Decreto No. 032 del 6 de septiembre del 2012.

2.2.9. Estudio de costos y tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo.

2.2.10. Certificación expedida por el Secretario Técnico del Comité Permanente de Estratificación de Macaravita, de octubre del 2016.

Los anteriores documentos, en su valor integral, se incorporan al expediente.

### 3 ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta SSPD procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

#### **3.1 Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito relacionado con el "(i) Reporte en el SUI, de la creación del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos mediante acto administrativo municipal o distrital".**


El municipio de Macaravita incumplió con este requisito debido a que el respectivo Acuerdo Municipal que fue reportado en el SUI en cumplimiento del requisito previamente referido, tal y como se señaló en la Resolución No. SSPD 20164010053315 del 30 de septiembre de 2016, fue cargado de manera incompleta y tampoco fue allegado en respuesta a la solicitud probatoria realizada. Posteriormente, allegó el Acuerdo Municipal No. 05 de 12 de diciembre de 1999, sin embargo, a este le faltan los artículos 14, 15, 16, 18, 19, 20 y la hoja de firmas.

Al respecto manifiesta el recurrente, que no es de recibo la aseveración de que no se cumplió con el requisito bajo estudio, ya que el Acuerdo Municipal precitado fue discutido y aprobado de esa forma, es decir, con el yerro en su numeración.

El impugnante adjunta, como prueba de su aseveración, el Acuerdo en mención el cual contiene 7 folios con su respectiva constancia que certifica que su contenido es copia fiel, auténtica e íntegra del original que reposa en el Concejo Municipal de Macaravita, firmada por el presidente del Concejo Municipal y el alcalde de Macaravita, como se puede observar a continuación:

La presente es fiel copia, Auténtica e Íntegra del original de los  
archivos que reposan en el Honorable Concejo Municipal de  
Macaravita Santander.

Para constancia Firman

  
JULIO ESTEBAN  
Presidente Honorable  
Concejo Municipal  
Macaravita Santander

  
JIMMY NOE GOMEZ SEPÚLVEDA  
Alcalde  
2016-2018  
Macaravita Santander

Adicionalmente, adjunta una certificación firmada por el presidente y secretaria del Concejo Municipal que certifica que el Acuerdo No. 005 de 1999 fue leído, discutido y aprobado en dos sesiones diferentes. A continuación se puede observar dicha certificación:

**LOS SUSCRITOS PRESIDENTE Y SECRETARIA DEL HONORABLE  
CONCEJO MUNICIPAL DE MACARAVITA SANTANDER**

**CERTIFICAN:**

Que el Acuerdo Número 005 de fecha Mayo 12 de 1999, fue leído, discutido y aprobado en dos sesiones diferentes con la presencia mayoritaria del Honorable Concejo Municipal.

Macaravita, Mayo doce (12) de mil novecientos noventa y nueve (1999)

  
**JOSE REDULO MIRANDA**  
Presidente Concejo Mpal.

  
**FLOR ELBA HERRERA CÁCERES**  
Secretaria.

Así las cosas, y como quiera que se adjuntaron pruebas que certifican que el Acuerdo con yerro en la numeración no es de carácter intencional y se encuentra completo, se considerará como cumplido el requisito en discusión.

Finalmente se precisa que, el diagnóstico al cual alude el recurrente, sólo contiene información de los indicadores, formatos y formularios efectivamente reportados, pero no presenta ningún tipo de evaluación de lo cargado, toda vez que la misma sólo se hace en el acto administrativo correspondiente, aclaración que se consigna en el mismo documento.

**3.2. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito relacionado con el “Reporte en el SUI de la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital o quien haga sus veces, en la que conste que la estratificación aplicada en la vigencia a certificar está conforme a la metodología nacional establecida.”**

El recurrente expone cada una de las normas que rigen la estratificación en Colombia y señala que las mismas se encuentran descritas en la certificación reportada en el SUI así como los decretos de adopción que expidió en cumplimiento de dichas normas, con lo cual se puede deducir que la estratificación que se aplicó en el 2015 se encuentra conforme a la metodología nacional establecida.

Afirma que en el proceso que adelantó esta Superintendencia al Municipio de MACARAVITA se violó el derecho a la igualdad así como otros principios de interpretación y que, en consecuencia, esta entidad utilizó una interpretación leguleya y exegética del Decreto 1077 de 2015.

- De la certificación reportada en el SUI

Se hace necesario recordar que a través de la estratificación<sup>1</sup>, se clasifica a la población según sus condiciones socio-económicas, a efectos de permitir que la redistribución del ingreso y el principio de solidaridad que deben imperar en el régimen de tarifas para los servicios públicos domiciliarios se cumplan efectivamente (Artículo 367 de la Constitución). La Ley 142 de 1994, en este caso, hace uso de este mecanismo para determinar qué sectores de la población deben, además de pagar los costos propios de los servicios públicos de que son usuarios, asumir un pago extra, a fin de colaborar con ese otro sector de la población que no tiene los recursos suficientes para cubrir los costos reales de estos servicios.

Frente a lo alegado en el recurso, es importante aclarar que el Gobierno Nacional<sup>2</sup>, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, definió los requisitos que debían acreditar los municipios y distritos para obtener la certificación que les permita administrar los recursos del SGP-APSB. Para el aspecto relacionado con la “Aplicación de la estratificación socioeconómica, conforme a la metodología nacional establecida.” que tiene como fin asegurar que los prestadores de servicios públicos de acueducto,

1 Las leyes vigentes en materia de estratificación son: la Ley 142 de 1994, la Ley 505 de 1999 y la Ley 732 de 2002.

2 Artículo 4 de la Ley 1176 de 2007.

alcantarillado y aseo apliquen la estratificación socioeconómica, conforme a la metodología vigente el Decreto 1077 de 2015 señaló que las entidades territoriales debían realizar lo siguiente<sup>3</sup>:

- "(i) Reporte en el SUI el decreto mediante el cual se adopta la estratificación urbana.*
- (ii) Reporte en el SUI del estrato asignado a cada inmueble residencial urbano, en el formato habilitado para la vigencia respectiva.*
- (iii) Reporte en el SUI de la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital o quien haga sus veces, en la que conste que la estratificación aplicada en la vigencia a certificar está conforme a la metodología nacional establecida."*

Nótese que cada uno de los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional en el Decreto 1077 de 2015, se encuentran definidos en el marco del aspecto indicado en el Artículo 4 de la Ley 1176 de 2007, así las cosas, con el decreto de adopción de la estratificación urbana, el reporte del Formato de Estratificación y Coberturas y la certificación sobre la metodología de estratificación aplicada ésta Superintendencia puede verificar si el municipio o distrito aplicó o no -en la vigencia a certificar- la estratificación socioeconómica conforme a la metodología nacional establecida.

Respecto a cada uno de los requisitos antes mencionados se debe señalar que:

- (i) **Decreto mediante el cual se adoptó la estratificación del área urbana:** Tal como lo señala el numeral 3 del Artículo 101 de la Ley 142 de 1994 una vez desarrolladas las labores necesarias para la estratificación, el alcalde adoptará mediante decreto los resultados de la estratificación y los difundirá ampliamente.

La Ley 732 de 2002 estableció los plazos máximos dentro de los cuales los alcaldes municipales debieron realizar y adoptar las estratificaciones, para la zona urbana señaló:

*"- Catorce (14) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley los municipios de categorías primera hasta con 200.000 habitantes, segunda, tercera, cuarta y quinta.*

*- Dieciséis (16) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley los municipios y distritos de las Áreas Metropolitanas y de categorías especial y primera con más de 200.000 habitantes.*

*- Diecinueve (19) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley los clasificados en categoría sexta."*

- (ii) **Reporte al SUI del estrato asignado a cada inmueble residencial:** La Circular Externa Conjunta 20081000000034 del 3 de marzo de 2008, fijó por primera vez todo lo referente al proceso de cargue al SUI de la Estratificación de los Municipios, y para ello dispuso que corresponde como obligación de los municipios, según lo establece el Artículo 101 en sus numerales 101.1 y 101.3 de la Ley 142 de 1994, clasificar en estratos los inmuebles que reciban servicios públicos y notificar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
- (iii) **Certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital:** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.5 de la Ley 142 de 1994, antes de iniciar los estudios conducentes a la adopción, el alcalde deberá conformar un Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica que lo asesore y cuya función principal será la de velar por la correcta aplicación de las metodologías suministradas por el gobierno nacional en la materia.

El Comité debe contar con una Secretaría Técnica que es ejercida por el funcionario responsable de la estratificación en la Secretaría de Planeación de la Alcaldía o quien haga sus veces y tiene -entre otras- la siguiente función: *"Prestar al Comité el apoyo técnico necesario para el cumplimiento de sus funciones, especialmente en lo relacionado con la información relativa a las normas, metodologías, estudios, entre otros."*<sup>4</sup>

En síntesis, estos requisitos pretenden que las entidades territoriales demuestren que **adoptaron** la estratificación urbana, **asignaron** los estratos adoptados a cada uno de los inmuebles residenciales y que la estratificación que **aplicaron** estuvo conforme a la metodología nacional establecida; lo anterior, en atención a lo señalado en el Artículo 3º del Decreto 1538 de 1996 así:

*"Para efectos de la reglamentación del proceso de estratificación se hace necesario distinguir los siguientes términos:*

3 Artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015.

4 Reglamento Técnico del Comité Permanente de Estratificación

*Realización. Proceso mediante el cual se aplican los procedimientos técnicos establecidos en las metodologías diseñadas por el Departamento Nacional de Planeación, por parte del alcalde o el gobernador.*

*Adopción. Acto mediante el cual el alcalde o el gobernador expide el decreto por medio del cual, como resultado de la aplicación de las metodologías, se asignan los estratos a los inmuebles residenciales por el término de cinco años.*

*Aplicación. Fase en el cual las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios en el municipio o distrito empiezan a facturar el cobro de éstos con base en las estratificaciones adoptadas."*

En virtud de lo anterior, es claro que le corresponde a la entidad territorial objeto del proceso de certificación acreditar en el SUI el cumplimiento de los requisitos para obtener la certificación y a esta Superintendencia verificar lo señalado en los artículos 2.3.5.1.2.1.6. y 2.3.5.1.2.1.7. del Decreto 1077 de 2015<sup>6</sup> sin poder suponer o deducir a favor de la entidad territorial la información reportada en el SUI.

Sobre este punto es necesario traer a colación lo que se denomina poder discrecional de la administración, definido por el profesor Gustavo Penagos<sup>7</sup> así:

*"La doctrina moderna del derecho administrativo entiende que la discrecionalidad, es cierta libertad de apreciación de los hechos, para decidir u orientar su actuación.*

*El ejercicio de toda actividad administrativa, necesariamente debe encontrar apoyo en la constitución y leyes. La discrecionalidad, no es la ausencia de derecho, ni la arbitrariedad, es una atribución o alternativa que ofrece el derecho al gobernante, para valorar las circunstancias sociales, políticas o económicas en el momento de tomar una decisión.*

*El llamado poder discrecional, diríase mejor facultad discrecional, es la condición indispensable de toda buena y eficiente administración. Sin embargo, su limitación es así mismo indispensable para que el Estado no sea arbitrario, y para que los administrados no se encuentren expuestos al simple arbitrio de los gobernantes (...)"*

Al respecto de la discrecionalidad, la Corte Constitucional en la Sentencia T-265 de 2013 indicó:

*"Pueden extraerse tres elementos comunes a toda potestad discrecional: i). Debe existir una norma de rango constitucional o legal que la contemple expresamente. En virtud de los artículos 6, 121, 122 y 123 de la Carta, en un Estado de derecho las autoridades solamente pueden actuar conforme las competencias que les han sido otorgadas. Lo anterior tiene "por finalidad delimitar el campo de acción, función o actividad que corresponde ejercer a una determinada entidad o autoridad pública, haciendo efectivo de esta manera el principio de seguridad jurídica. En el Estado de derecho la posición jurídica del individuo es diametralmente opuesta a la del funcionario público. El individuo puede hacer todo aquello que no le esté expresamente prohibido por la ley. En cambio, el gobernante, la autoridad, actúa siempre con competencias que, en principio, son limitadas. Al individuo, al ciudadano lo que no le está expresamente prohibido le está permitido. Al funcionario público lo que no le está expresamente atribuido, le está prohibido. (...) La competencia es parte esencial del debido proceso y presupuesto de validez de los actos que se profieren, pues si una autoridad expide un acto sin tener facultades para hacerlo, éste es nulo". Por esta razón, para que una entidad pública pueda apartarse de los postulados generales y flexibilizar su actuación mediante el ejercicio de facultades discrecionales, debe como mínimo estar soportado en una norma legal o constitucional que la faculte expresamente, ii). Su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que la autoriza. La Corte ha manifestado que "la adecuación es la correspondencia, en este caso, del contenido jurídico discrecional con la finalidad de la norma originante, en otras palabras, la armonía del medio con el fin; el fin jurídico siempre exige medios idóneos y coherentes con él". Es claro entonces que "el derecho no es un fin en sí mismo sino un medio al servicio de la sociedad. Por lo tanto, es necesario confrontar los móviles con los fines. De allí surgen justamente las teorías del 'abuso del derecho', y la 'desviación de poder'. Ello es un principio básico del Estado Social de Derecho, para evitar que la discrecionalidad se convierta en arbitrariedad. Todo acto del Estado debe estar conforme con su finalidad esencial, ya que las potestades se conceden, no para que se cesen a discreción, sin discernimiento, sino en vista de un fin determinado". Sin perjuicio de los objetivos de toda ley, de manera genérica la Constitución consagra como fines de la actuación administrativa: i) la protección de la vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades de los residentes en Colombia (art. 2);*

<sup>5</sup> Inciso 2º del Artículo 4º de la Ley 1176 de 2007: "Los distritos y municipios están en la obligación de reportar a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la información requerida."

<sup>6</sup> Artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015: "La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 4º de la Ley 1176 de 2007. Para estos efectos, verificará lo señalado en los artículos siguientes."

<sup>7</sup> El acto administrativo, quinta edición. Gustavo Penagos

y ii) el interés general (art. 209). Así, para comprobar si una actuación cumple con este requisito, se deberá verificar tanto el cumplimiento de los objetivos genéricos como los específicos de la norma, iii) La decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa. La determinación que se adopta debe guardar una medida o razón que objetivamente se comparezca con los supuestos fácticos que la originan: "El principio de proporcionalidad cumple dos funciones: i) en primer lugar, sirve de criterio de acción, esto es, como sustento de las actuaciones de los distintos órganos del Estado, el cual se realiza con su observancia y aplicación a cada caso concreto, ii) En segundo lugar, es un criterio de control, pues debe adoptarlo el juez para efectos de evaluar la proporcionalidad de la respectiva actuación administrativa".

En virtud de lo anterior, se concluye que las autoridades públicas administrativas, en el ejercicio de sus funciones y para la adopción de sus decisiones, están sometidas a la Constitución y a la ley, y sus actuaciones se encuentran delimitadas por las expresas atribuciones y potestades asignadas constitucional y legalmente, dentro de los límites que establece la Carta Política.

Así las cosas, respecto al requisito que nos ocupa, el Decreto 1077 de 2015 establece que el Municipio de MACARAVITA debía reportar en el SUI:

"(...)

*... la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital o quien haga sus veces, en la que conste que la estratificación aplicada en la vigencia a certificar está conforme a la metodología nacional establecida".*

Por su parte, se debe verificar:

1. Que el reporte al SUI se haya realizado antes de la fecha límite de cargue, es decir, antes del 20 de mayo de 2016,
2. Que la certificación este expedida por el secretario técnico del Comité Permanente de Estratificación,
3. Que la certificación reportada indique la vigencia a la que se refiere y
4. Que la certificación señale si la estratificación que se aplicó estuvo o no conforme a la metodología nacional establecida.

El fundamento de ésta interpretación del Artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015 atiende lo señalado en el Artículo 28 del Código Civil Colombiano, que dispone:

*"SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal."*

En cumplimiento de este marco normativo, se estableció que el Municipio de MACARAVITA reportó en el SUI una certificación en la que se menciona lo relacionado con la adopción de la estratificación.

Sin embargo, la certificación reportada NO evidencia, ni señala y tampoco indica si la estratificación que adoptó fue aplicada en el 2015 de acuerdo con la metodología nacional vigente, entendida ésta como la "fase en el cual las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios en el municipio o distrito empiezan a facturar el cobro de éstos con base en las estratificaciones adoptadas"<sup>8</sup>, y cuya verificación le corresponde realizar al Comité Permanente de Estratificación y certificar a la secretaria técnica de dicho Comité.

Por lo expuesto, se puede concluir que no es cierto que la certificación reportada esté demostrando un hecho notorio<sup>9</sup> (Artículo 167 del Código General del Proceso) pues **no** es conocido por todos si la estratificación que aplican las empresas de servicios públicos en el Municipio de MACARAVITA está conforme a la metodología nacional establecida, por ello, el Decreto 1077 de 2015 consagra que para demostrar dicha situación el secretario técnico del Comité Permanente de Estratificación debía certificarla, y para ello debe revisar el contenido de las actas de las reuniones que realizó dicho comité en el 2015.

Hechas las anteriores aclaraciones y desvirtuados los argumentos del recurrente, se procede a analizar la certificación anexa en el recurso de reposición, para determinar el cumplimiento o no del requisito objeto de estudio, así:

8 Artículo 3º del Decreto 1538 de 1996.

9 Sentencia C-145/09, Corte Constitucional: "Hecho notorio es aquél cuya existencia puede invocarse sin necesidad de prueba alguna, por ser conocido directamente por cualquiera que se halle en capacidad de observarlo. Según el artículo 177 del C. P. C., los hechos notorios no requieren prueba"



MUNICIPIO MACARAVITA


 DEPARTAMENTO DE SANTANDER  
 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL MACARAVITA 2016-2019  
 NIT: 890210947-1

 REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 Libertad y Orden

www.macaravita-santander.gov.co

Email: alcaldia@macaravita-santander.gov.co

**EL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACIÓN DE MACARAVITA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES ASIGNADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 035-2016 DEL 19 DE FEBRERO DE 2016 "POR MEDIO DE LA CUAL SE NOMBRA AL SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN MUNICIPAL"**

**CERTIFICA QUE:**

De conformidad con el artículo 11 de la ley 505 de 1999, aplicando el formulario de encuesta tipo 3 establecido por la misma, y en aplicación de los artículos 101 de la ley 142 de 1994, ley 689 de 2001 y 732 de 2002. El municipio de Macaravita mediante el Decreto No.041 del 19 de Diciembre de 2005 "POR EL CUAL SE ADOPTA LA ESTRATIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE MACARAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER", y el Decreto No.016 de Abril 11 de 2005 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA ESTRATIFICACIÓN DE FINCAS Y VIVIENDAS DISPERSAS LOCALIZADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MACARAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER", realizo dicha adopción de las estratificaciones urbana y rural siguiendo los lineamientos normativos legales vigentes para la fecha de la expedición de los decretos mencionados anteriormente, según se desprende de los mismos, sumado a que contra dichos decretos no se ha interpuesto demanda de nulidad.

De la misma forma la secretaria técnica del comité permanente de estratificación certifica que para la vigencia 2015 y a la fecha, los decretos anteriormente mencionados se encuentran vigentes y no han sido modificados. En ejercicio de la presunción de legalidad de los actos administrativos (Decreto No.041 del 19 de Diciembre de 2005 y Decreto No.016 del 11 de Abril de 2005) el Secretario Técnico Comité Permanente de Estratificación certifica que la estratificación adoptada y aplicada dentro del municipio para la vigencia 2015 estuvo conforme a la metodología nacional establecida.

Se expide a los veintiséis (26) días del mes de octubre del año dos mil dieciséis (2016)

  
 Ing EDGAR FERNANDO NIÑO SOLANO  
 Secretario de Obras Públicas y Planeación  
 Secretario técnico comité permanente de estratificación

  
 Vo. Bo. JIMMY NOE GOMEZ SEPULVEDA  
 Alcalde

Se evidencia en el documento allegado que:

- La certificación se encuentra suscrita por el señor EDGAR NIÑO, en su calidad de Secretario Técnico del Comité Permanente de Estratificación y JIMME GOMEZ, en su calidad de alcalde del MACARAVITA.
- En la certificación se indica que la estratificación aplicada en el 2015 se encuentra acorde a la metodología nacional establecida.

En estas condiciones, considera esta SSPD que la certificación en mención, aclara el documento reportado inicialmente, por lo que de manera excepcional se tendrá con la misma cumplido el requisito atinente a reportar al SUI la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital o quien haga sus veces, en la que conste que la estratificación aplicada en la vigencia a certificar está conforme a la metodología nacional establecida.



No obstante, se advierte que el ente territorial en las siguientes oportunidades deberá adelantar el procedimiento necesario para reportar al SUI la certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital o quien haga sus veces, en la que conste que la estratificación aplicada cumple con **todos** los términos de la norma, sin que haya lugar a que este Despacho acepte nuevamente circunstancias como las presentadas en el caso concreto.

Para finalizar, es preciso aclarar que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.3.5.1.2.1.10 del Decreto 1077 del 2015, esta entidad define los protocolos de revisión de la información y en este entendido aquello que se enviara a pruebas, sin embargo la no apertura de un periodo probatorio no constituye violación de derecho alguno al municipio, ya que las oportunidades procesales han sido debidamente respetadas y observadas, resolviendo las inconformidades del ente territorial al respecto, las cuales han sido estudiadas en este acto administrativo.

**3.3 Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito relacionado con el "Reporte en el SUI del estudio de costos y tarifas en formato PDF, elaborado con posterioridad a la entrada en vigencia de las metodologías tarifarias para cada uno de los servicios públicos prestados".**

El recurrente alegó que no se incumplió con este requisito, dado que lo reportó oportunamente en la plataforma. Agrega que la supuesta imposibilidad de abrir el archivo en la aplicación INSPECTOR del SUI no es cierta. Argumenta que, en razón del tamaño del archivo, lo subió en formato "winrar." y explica la forma de visualizarlo.

Como prueba del cumplimiento del requisito, adjunta el respectivo estudio de costos y tarifas correspondiente a la metodología tarifaria para cada uno de los servicios públicos prestados. Por un lado allega el documento correspondiente a la estructura tarifaria para el servicio público de aseo, correspondiente a agosto de 2012, así como allega la estructura tarifaria para el servicio de acueducto y alcantarillado, de agosto de 2012.

Sobre el particular, cabe anotar que revisado el respectivo estudio de costos y tarifas correspondiente, este cumple con lo requerido en la norma a pesar de que no fue posible su apertura en el formato PDF en una primera oportunidad.

ESTRUCTURA TARIFARIA PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO

ESTUDIO REALIZADO BAJO LA METODOLOGÍA TARIFARIA ESTABLECIDA EN LAS RESOLUCIONES  
CRA 351 Y 352 DE 2004 EMITIDAS POR LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO BÁSICO - CRA

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE MACARAVITA -  
SANTANDER

MUNICIPIO DE MACARAVITA

SANTANDER

AGOSTO 2012

En este entendido, con ánimo garantista, esta Superintendencia tendrá como cumplido el requisito bajo estudio, advirtiéndole que el ente territorial en las siguientes oportunidades deberá adelantar el procedimiento necesario para reportar la información requerida al SUI de forma completa y accesible.

En mérito de lo expuesto, el asesor que funge como Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- REVOCAR** la Resolución No. SSPD 20164010055045 del 30 de septiembre de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- CERTIFICAR** al municipio de MACARAVITA – SANTANDER, en relación con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico.

**ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR** personalmente de la presente resolución al alcalde del Municipio de MACARAVITA del Departamento de SANTANDER, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

**ARTÍCULO CUARTO.- COMUNICAR**, una vez en firme, el contenido de la presente resolución al Gobernador del Departamento de SANTANDER, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y publicar en la página web de la SSPD.

**ARTÍCULO QUINTO.-** La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, D. C.



**CARLOS ANDRÉS BERNAL CASAS**

Asesor que funge como Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información

Proyectó: Andrés Felipe Saavedra Reyes - Abogado Contratista - Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo  
Revisó: Elicita Vanessa Benavides - Abogada Contratista – Grupo de Certificaciones e Información<sup>2</sup>  
Expediente: 2016401351600166E